

GUERRA Y POLITICA EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA*

Gonzalo Sánchez Gómez**

I. PRESENTACION

Guerra y política, orden y violencia, violencia y democracia, y en el límite, vida y muerte, son algunas de las múltiples oposiciones y complementariedades a partir de las cuales se hace descifrable la historia colombiana.

A decir verdad, si hay algo que obsesiona en el devenir histórico y en la cotidianidad de este país es la no resolución de los contrarios, su terca coexistencia, como si formaran parte de una cierta disposición natural de las cosas. Sólo de manera coyuntural, en momentos de aguda crisis, polaridades como ésta de guerra y política que nos proponemos estudiar aquí, se sienten socialmente y se perciben intelectualmente como relaciones problemáticas. Hoy nos encontramos precisamente en uno de esos momentos. El tema, el vocabulario, el miedo a la guerra, se han apoderado de los colombianos. Ya no se habla siquiera de Violencia, sino de la guerra. De la guerra de los narcos, de la guerra sucia, de la guerra de las guerrillas, de la guerra del presidente. El término no es, por supuesto, unívoco pero es indicativo. Políticos y académicos ya no se interrogan confiados sobre las bases de la unidad de la nación

sino que indagan confundidos sobre las raíces de su división.

Sabemos desde Clausewitz de las relaciones orgánicas entre la guerra y la política: "La guerra no es sino una parte de las relaciones políticas"... "la política es la matriz dentro de la cual se desarrolla la guerra" (1). Acaso desde esta perspectiva lo que le añade complejidad y fuerza ilustrativa al caso colombiano es la diversidad de combinaciones de dicha relación en los distintos contextos históricos: a veces, como en las guerras civiles del siglo XIX, guerra y política entran en relaciones de continuidad y complementariedad; otras, como en la guerra civil no declarada de la Violencia de los años cincuentas, la guerra se despliega como una estrategia de exclusión, de supresión de lo político; en una tercera fase, la de la guerra de guerrillas, que se inicia a partir del Frente Nacional, las armas se convierten en sucedáneo de la política y finalmente, en el momento actual los términos de la confrontación están caracterizados por una fragmentación extrema tanto de la guerra como de lo político. Para citar otra vez a Clausewitz, "cada época tiene sus propias formas de guerra" (2), a lo cual haría eco Carl Schmitt afirmando que el campo de la político se modifica sin cesar según las correlaciones de fuerza (3).

* En la elaboración de este ensayo me he beneficiado ampliamente y espero que no más allá de lo permisible, de las ideas expuestas por Daniel Pécaut en su seminario sobre "Democratie, Crises et Violence", en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

** Historiador, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

1. Carl von Clausewitz, *De la Guerre*, Paris, Editions de Minuit, 1955, pp. 703 y 727.

2. *Op. cit.*, p. 689.

3. Carl Schmitt, *La notion de Politique-Theorie du Partisan*, Paris, Calman-Lévy, 1972, p. 183.

Historicidad de la guerra e historicidad de lo político. Este ensayo es, pues, un intento de precisar, en un modelo no evolutivo sino de rupturas sucesivas, los diferentes contextos y los diversos tipos de combinaciones entre guerra y política por los que ha pasado el todavía inacabado proceso de formación de la nación colombiana.

II. LAS GUERRAS CIVILES Y LA POLÍTICA

Abundan en Colombia los relatos, crónicas y "memorias" de las guerras civiles del siglo XIX, pero carecemos todavía de visiones de conjunto que nos permitan caracterizar la dinámica entre guerra y sociedad, es decir, que hagan viable una sociología de las guerras civiles. No obstante, disponemos de los elementos suficientes para la argumentación general de este ensayo (4).

Guerra y política son prácticas colectivas simétricas e indisociables en el siglo XIX. En efecto, la memoria política del siglo XIX en Colombia se construye sobre la base de una doble referencia: desde el punto de vista de la primera, la historia nacional aparece como una historia de guerras y batallas. Guerras y batallas de Independencia, por supuesto, pero también, con posterioridad a las luchas liberadoras, las guerras entre caudillos que se afirmaban a nombre del combate contra la anarquía, tal la Guerra de los Supremos, en 1840; las guerras federales (1860, 1876-77); la Guerra de los Mil Días, al quiebre del siglo; la batalla de Garra-pata (1877), la batalla de La Humareda (1885), las batallas de Palonegro y Peralonso (Guerra de los Mil Días), para dar sólo algunos ejemplos de una larga lista. Desde el punto de vista de la segunda referencia y sin que ello represente un contrasentido, la historia de Colombia en el siglo XIX se puede leer también como una historia de Constituciones, las más notables de ellas producto de la guerra misma. Tal fue el caso de la de Rionegro, en 1863, a la cual Víctor

Hugo habría hecho el incómodo elogio de calificarla de "Constitución para ángeles", y de la de 1886, que en sus lineamientos esenciales está aún vigente. En este contexto, la guerra se comporta como fundadora del Derecho, del orden jurídico-político, de una nueva institucionalidad, y no como fuente de anarquía. De hecho, en este país el culto y la fascinación por las armas no ha sido incompatible con el culto al formalismo jurídico. No en vano y desde otro enfoque se ha podido hablar de "guerras constitucionales" (5).

La guerra en Colombia en el siglo XIX no es negación o sustituto, sino prolongación de las relaciones políticas. La guerra, podría decirse, es el camino más corto para llegar a la política, y mientras las puertas que podrían considerarse como normales permanecen bloqueadas, ella constituye en muchos aspectos un singular canal de acceso a la ciudadanía.

Pero si las armas aparecen como el lenguaje duro de la política, y las guerras como el modo privilegiado de hacer política, la política a su vez no puede ser pensada sino como un campo de batalla en el cual la hacienda aportaba soldados, el partido respectivo banderas y la Iglesia muchas cosas a la vez: un lenguaje y un espíritu de cruzada, la representación de la diferencia como cisma, la demonización del adversario político.

Nada mejor para expresar esta relación entre la guerra y la política que la fórmula utilizada por el general Gaitán Obeso para definir sus huestes: "ejército de ciudadanos" (6). Después de todo, y en un plano ya no exclusivamente colombiano, hay que subrayar el uso de un repertorio común entre la guerra y la política del cual hacen parte, por ejemplo, las siguientes nociones: estrategia, táctica, vanguardia, campaña, relaciones de fuerza, conquista del poder, campo enemigo.

4. Aludo a trabajos como el de Charles Bergquist, *Café y conflicto en Colombia 1886-1910*, Medellín, FAES, 1981; de Alvaro Tirado Mejía, *Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia*, Bogotá, Biblioteca Básica Colcultura, 1976; de Jorge Villegas y José Yunis, *La Guerra de los Mil Días*, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1979, y el sugestivo ensayo de Malcolm Deas, citado más adelante, sobre la guerra de 1885, entre otros.

5. Hernando Valencia Villa, "De las guerras constitucionales en Colombia...", en *Análisis Político*, No. 6, enero a abril, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1989, pp. 80-97.

6. Malcolm Deas, "Poverty, Civil War and Politics: Ricardo Gaitán Obeso and his Magdalena River Campaign in Colombia, 1885", en *Nova Americana*, No. 2, Torino, 1979, p. 291.

Hemos establecido en otro lugar (7) que las guerras civiles que dominan la historia política del siglo XIX —y cuyo número se hace llegar hasta 14— son confrontaciones y movilizaciones armadas que expresan en lo fundamental rivalidades entre las clases dominantes, alinderadas indistintamente en los nacientes partidos políticos, el Liberal y el Conservador, que han sobrevivido prácticamente sin solución de continuidad hasta hoy. Podríamos agregar que la guerra en el siglo XIX es no sólo una aventura llena de peripecias propiamente bélicas y de intrigas pasionales sino, ante todo, el escenario de definición de jefaturas políticas, candidaturas presidenciales, controles territoriales, en una palabra, de relaciones de poder. Lo que se juega en ellas, por tanto, no es la toma del Estado, o el cambio del sistema, como en las revoluciones, sino simplemente la participación burocrática, la incorporación al aparato institucional de las fuerzas ocasionalmente excluidas. Esta aclaración no nos puede llevar empero a minimizar los alcances de lo que se jugaba en los principales capítulos de las guerras civiles del siglo XIX.

Los temas de la guerra eran, ciertamente, los grandes temas de la política, comunes por lo demás en diversos grados y combinaciones a todos los países de la América Latina. Se los puede agrupar en cuatro grandes bloques:

Primero, el concerniente a la forma de organización política, es decir, al necesario equilibrio de los diversos poderes regionales entre sí y entre éstos y el también necesario arbitraje central. En varios países se las conoce como las “guerras federales” e irrumpieron con el caso de los caudillos hegemónicos de la pos-Independencia, como Páez en Venezuela, Rosas en Argentina, Santa Anna en México.

Segundo gran tema explícito o latente en estas guerras es el concerniente a lo que hoy llamaríamos “modelos de desarrollo”. Se trata en este caso del debate sobre las condiciones de inserción periférica del país en la órbita capitalista y especialmente en la división internacional del trabajo que se planteaba bajo la forma

de una opción entre manufacturas o materias primas, como base de nuestra competitividad en el mercado mundial.

Una tercera fuente de conflicto es la que se refiere a las relaciones Iglesia-Estado-Partidos, cuyo trasfondo es el problema de la hegemonía o el pluralismo cultural. Pero los puntos de mayor sensibilidad tenían que ver no sólo con la laicidad del Estado, la posición de los partidos frente a los privilegios eclesiásticos, la capacidad de intervención en las relaciones privadas y en el sistema educativo, sino también con los apetitos que suscitaba el manejo de los bienes de la Iglesia (rurales en particular). Esta problemática hizo que muchos de los episodios de las guerras civiles se vivieran como guerras de religión, por ejemplo en la guerra de 1876 y en la Guerra de los Mil Días, a la vuelta del siglo (8). La politización de la Iglesia y la sacralización de la política hacen parte del mismo cuadro mental.

Por último —no hay que omitirlo—, muchas veces en estas guerras se ponían en juego derechos y libertades que hacían parte del desarrollo general de la sociedad y no exclusivamente de las élites dominantes. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, no puede verse sólo en términos de enfrentamiento entre esclavistas y hacendados urgidos de mano de obra sino también como apropiación nacional de una conquista democrática universal. Lo mismo podría decirse de gran parte del ideario liberal radical en lo que tiene de potencial democrático y anticolonial.

En todo caso, vistas en perspectiva histórica y desde el punto de vista de los resultados, estas guerras son guerras inconclusas: no hay en ellas netos vencedores ni vencidos. Las de comerciantes, artesanos y terratenientes culminan en el pragmatismo social de la diversificación de oficios y de inversiones y no en la hegemonía de unos sobre otros; las de religión, estimuladas originalmente por la abolición de censos y las desamortizaciones de Juárez en

7. Gonzalo Sánchez, “Raíces históricas de la amnistía o las etapas de la guerra en Colombia”, en *Revista de Extensión Cultural*, No. 15, Medellín, 1984.

8. Sobre este punto véase de Christopher Abel, *Política, Iglesia y Partidos en Colombia: 1886-1953*, Bogotá, FAES-Universidad Nacional, 1987. Asimismo, de Fernán González, “La Iglesia Católica y el Estado colombiano, 1886-1985”, en *Nueva Historia de Colombia*, Bogotá, Editorial Planeta, 1989, Tomo 2, pp. 341-396.

México (1855-57), desembocan en Colombia en el Concordato; y las de las oligarquías regionales frente al Estado central terminan en un laborioso compromiso entre "centralización política y descentralización administrativa" (Constitución de 1886).

Como rasgo distintivo de estas guerras hay que resaltar, además, la confluencia, o quizás más precisamente la fusión entre la conducción político-ideológica y el mando militar. El mosaico de la política colombiana del siglo XIX está lleno de generales, no sólo de los que habían participado y se habían hecho en el proceso emancipador, sino de los que surgen y se reproducen precisamente en el transcurso de las guerras civiles. Jose Hilario López, Obando, Mosquera, hasta llegar a Uribe Uribe y a Benjamín Herrera en los albores del siglo XX, son algunos de los más notables en el panteón del Partido Liberal. El conductor político era, pues, al mismo tiempo el jefe militar en defensa de los que se erigían en el momento como los principios de su partido, los colores de su bandera. Poco importa para el caso que esta convergencia fuera la expresión de un proceso de concentración de roles sociopolíticos, o simplemente el signo de un todavía inacabado proceso de diferenciación. Hay que admitir, no obstante, como lo ha recordado Fernando Guillén Martínez, que el prestigio de muchos de estos generales no derivaba directamente de sus gradaciones militares sino de un poder social previamente constituido en su condición de hacendados y también —agregamos nosotros— de comerciantes o profesionales de renombre (9). Es decir, que la organización de la guerra era una réplica de las jerarquías de la sociedad en la cual ella se desenvolvía. Al decir de uno de los generales de la guerra de 1885, esta circunstancia permitía también que, a diferencia de los desposeídos que se enrolaban a la guerra por fines "oscuros", los poseedores de fortuna lo hicieran por los fines "nobles" de la política (10).

En realidad la participación de las clases subalternas en las guerras es equívoca. Convocadas y enroladas de manera resignada o forzada,

constituyen materialmente el grueso de los ejércitos, pero aparecen como privadas de la posibilidad de erigirse en actores políticos y sujetos históricos. Las más de las veces iban a la guerra como simples clientelas de caudillos y no como militantes de una causa propia. Lo cual no quiere decir que no salieran afectadas por la experiencia de la guerra, o que una vez desatada ésta no pusieran eventualmente en movimiento sus propios intereses, desprendiéndose del control político y militar de los caudillos y finalmente de toda autoridad, como suele acontecer incluso con los ejércitos mercenarios que un día deciden actuar por cuenta propia, incluso contra sus originales patrocinadores.

Pese, entonces, al carácter masivo de las guerras civiles decimonónicas, no se puede decir de ellas que fueran populares. Eran masivas pero fundamentalmente elitistas. En ellas, las élites dominantes adquirieron una singular destreza en el manejo del conflicto armado, que difícilmente se encuentra en otros países latinoamericanos. Hasta podría decirse que la conocida fórmula de la "combinación de todas las formas de lucha", exaltada por el partido comunista a partir de los años cincuenta y sesenta, e imitada luego por múltiples variantes de la izquierda revolucionaria es una herencia rebautizada de las guerras civiles. Ella fue primero practicada y socializada por las clases dominantes durante el siglo XIX en la dinámica de guerra y política, de combatientes y ciudadanos.

El final de estas guerras dice también mucho sobre su carácter. ¿Cómo terminaban ellas? Pues bien, salvo en la guerra por muchas razones excepcional del general Melo y los artesanos (1853-54), en la cual hay atisbos de un nuevo pacto social, las guerras del siglo XIX culminan en pactos horizontales. Y como además ninguna de estas guerras —excepto la del general Mosquera en 1861— es ganada por los rebeldes (11), el final se sella ritualmente con una amnistía que define alternativamente: condiciones de un *statu quo* honorable para los rebeldes derrotados; condiciones de renegocia-

9. Fernando Guillén Martínez, *El poder político en Colombia*, Bogotá, Punta de Lanza, 1979, p. 321.

10. Véase artículo ya citado de Malcolm Deas, p. 283.

11. Véase "La esponsión de Manizales", en *Análisis Político*, No. 6, enero a abril, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1989, p. 123.

ción de su incorporación para los rebeldes que se han manifestado fuertes; y, si los rebeldes se han mostrado realmente amenazantes, la amnistía será seguida eventualmente de la expedición de una nueva Constitución o por lo menos de una reforma electoral (ley de minorías) que abría el espacio institucional para los perdedores. De su conclusión podría plantearse literalmente lo que comentó uno de los participantes en las guerras federales de Venezuela, con motivo de la firma del Tratado de 1863: "después de tanto pelear para terminar conversando" (12), es decir, haciendo política. Aunque cabría agregar que en Colombia las clases dominantes han aprendido también a ganar la guerra después de la amnistía.

Hay que volver sobre esto: la perspectiva de toda guerra, casi podría decirse que el "inconsciente" de toda guerra era no la victoria total, sino el Pacto, el Armisticio. La guerra era, si se quiere, el mecanismo profundo de constitución del otro (individuo, colectividad, partido) como interlocutor político.

Gobiernos débiles, insurrectos también débiles, de las flaquezas de los unos y los otros usufructuaban las corrientes intermedias, las fuerzas civilistas, el espíritu frentenacionalista diríamos hoy. Es así como la lista de los Gobiernos de Unión puede ser tanto o más larga que la de las guerras. Según Fernando Guillén Martínez esta relación entre violencia y coalición que es un fenómeno recurrente en la historia colombiana desde el nacimiento de los partidos en el siglo XIX hasta el Frente Nacional, obedece a regularidades y pautas de funcionamiento que se pueden enunciar como un movimiento pendular que lleva a los partidos tradicionales de la **alianza estratégica** a la **lucha armada** y de nuevo a la **alianza** "en un proceso persistentemente repetido a lo largo de un siglo" (13). En esta complementariedad esencial, la guerra es el escenario en donde se reafirman los principios, la diferencia, en tanto que la política es el arte de transar.

En el siglo XIX (y quién sabe si se pueda hablar sólo en pasado) había indudablemente una enorme continuidad y fluidez entre la guerra y la política. Nunca pudo ser más cierta la conocida expresión de Clausewitz: "la guerra es la continuación de la política por otros medios"; pero a la inversa y con igual validez podía afirmarse que "la política era la continuación de la guerra por otros medios". Salir de una guerra para la preparación de la siguiente era tan normal como prepararse para la próxima contienda electoral. De ahí esa preocupación tan extraordinaria por la regulación de la guerra, como lo ha mostrado en estudio reciente Iván Orozco. La guerra no era considerada como una perversión de la política sino como su instrumento más eficaz. Aunque pueda parecer un anacronismo uno se siente inclinado a pensar que en aquel entonces era también muy cierto que la verdadera oposición era la **oposición armada**. Tomar las armas era un acto que entonces no tenía nada de revolucionario ni de heroico. Era simplemente engancharse (por decisión propia o por presiones insuperables) en esa actividad cíclica que era la guerra.

Los efectos a largo plazo de estas guerras, improvisadas y tumultuarias, eran contradictorios: por un lado, reforzaban el caciquismo y el caudillismo, pues los antiguos jefes militares, con el poder de negociación adquirido en la guerra, se convertían a menudo en los intermediarios naturales ante el poder central. Esto se siente en numerosas localidades, incluso ya bien entrado el siglo XX. Por otro lado, aparte de que dejaban frecuentemente devastadas muchas economías regionales, estas guerras desarraigaban a mucha gente que tomaba el camino de los frentes de colonización y que con ello renovó su cuadro mental y político y debilitó viejos lazos de dependencia.

Pero, en definitiva, cualquiera haya sido el resultado de estas guerras, ellas no socavaron los cimientos de la llamada "república señorial", a saber, la Hacienda, la Iglesia y los Partidos. Probablemente al terminar el siglo XIX estos tres tipos de asociaciones habían reforzado más bien su papel de ejes articuladores de la vida social, cultural y política de la nación apenas en ciernes.

En este contexto y con consecuencias futuras durables, diríase indefinidas, el Estado hacía

12. Miguel Izard, "Tanto pelear para terminar conversando. El caudillismo en Venezuela", en *Nova Americana*, No. 2, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1979, pp. 37-82.

13. Fernando Guillén Martínez, *El poder político en Colombia*, Bogotá, Punta de Lanza, 1979, p. 388.

de convidado de piedra. Frente al trípode Iglesia-Hacienda-Partidos, el Estado colombiano aparecía, en efecto, como un **Estado crónicamente suplantado** y por lo tanto como un poder con casi inexistentes solidaridades nacionales (14). Nada que se pareciera, pues, a un Estado-cerebro regulador del funcionamiento de la sociedad, como el que visualizaba Durkheim; ni a un Estado de corte weberiano en tanto aparato institucional monopolizador de la fuerza legítima; ni a un Estado árbitro de los conflictos sociales, como esperarían otros. Este carácter semiausente del Estado llevaba, en todo caso, a que la política y el problema del poder se resolvieran en la desnudez de la guerra. La matriz de la política, como en la visión clausewitziana de Carl Schmitt, era aquí la relación amigo-enemigo (15), a la cual se subordinaban eventualmente las demás oposiciones.

III. ENTRE LAS GUERRAS Y LA VIOLENCIA: LA DEMOCRATIZACIÓN FRUSTRADA

Numerosos cambios en la cultura política colombiana introdujo la próxima contienda armada generalizada, la Violencia.

Esboцemos primero los trazos más gruesos del tránsito entre los dos momentos. Entre las Guerras Civiles y esa otra guerra, más difícil de caracterizar, que los colombianos en un deliberado recurso a la polisemia decidieron nombrar La Violencia, hay modificaciones estructurales o acontecimientos históricos que le imprimen nuevos rumbos a las luchas sociales y políticas. Como tendencia general se puede constatar, en efecto, una confrontación creciente entre clases dominantes y clases subalternas, que coexiste, por supuesto, con otras oposiciones no clasistas, como la populista o la partidista. Pero la clasista, cabe insistir, exhibía rasgos frescos, como resultado de la multiplicación de los actores en el escenario

social: en primer lugar, en el curso de las tres primeras décadas se había ido construyendo un verdadero movimiento obrero independiente, marcado por influencias tan dispares como la Tercera Internacional, el anarquismo español, o las nuevas corrientes de la doctrina social católica; en segundo lugar, habían aflorado las luchas campesinas, con organizaciones autónomas, como los sindicatos agrarios y las ligas campesinas, las cuales se instalaron en el corazón de la economía cafetera y en el eje de las articulaciones más estrechas entre la hacienda y la política; y, en tercer lugar, el pueblo, con su vaguedad conceptual pero también con su materialidad ruidosa había irrumpido en la arena pública como punto obligado de referencia en la definición de estrategias políticas. A veces invitado a hacer acto de adhesión al universo oligárquico reformado, como sucedió durante la "República liberal" de Alfonso López Pumarejo; otras veces excluido y en tanto "inepto vulgo" simplemente denegada su capacidad de conducirse como un sujeto político responsable, variante ésta prohijada por Laureano Gómez, caudillo de una extrema derecha de raigambre hispánica; por último, y más excepcionalmente, el pueblo era a veces ungido como protagonista en la construcción de una prometida sociedad antioligárquica.

En fin, por encima de todas las transformaciones enumerables, hay un hecho decisivo en la primera mitad del siglo veinte colombiano, a saber: ha entrado a dominar el panorama político un movimiento cuya gestación se confunde casi con el despunte de todos estos nuevos signos de la modernidad, el gaitanismo.

Podría entonces decirse que, todavía hacia los años cuarentas, la Hacienda, la Iglesia y los Partidos seguían siendo el centro de gravedad de la sociedad colombiana pero habían aparecido también nuevos núcleos de poder político, nuevas identidades colectivas, nuevas redes de sociabilidad. En consecuencia, un obrero o campesino ya no era exclusivamente —digamos por vía de ejemplo— liberal (partido tradicional), católico (Iglesia) al servicio de don Fulano (Hacienda), sino que también podía ser militante de formaciones partidarias alternativas (socialista, comunista, unirista); miembro de un sindicato o liga campesina; afiliado a una sociedad secreta (masónica o teosófica), para mencionar sólo algunas de las posibilidades

14. Daniel Pécaut ha insistido en sus obras sobre Colombia en la precariedad del Estado como rasgo distintivo de la evolución política del país en el contexto latinoamericano. Recientemente ha retomado el tema en el artículo titulado: "Colombie: Violence et Démocratie", en *Revue Politique et Parlementaire*, París, 1989.
15. Carl Schmitt, *La notion de Politique-Théorie du Partisan*, Paris, Calmann-Lévy, 1972.

más innovadoras. Adicionalmente, y notablemente en períodos de movilización electoral, los campesinos empezaban a entrar en nuevas dinámicas de interacción social a través de la plaza pública, que emulaba ahora con el púlpito como espacio de pedagogía (y de confrontación) política. Para muchos campesinos, es preciso recordarlo, la plaza pública era el único escenario en el cual podían oír de asuntos que trascendieran los horizontes de su vereda y su localidad, era su único punto de contacto con la "gente ilustrada", con los "doctores" de la ciudad. Fue precisamente Gaitán quien llevó a su límite las potencialidades y los riesgos de la plaza pública con un abanico de recursos gestuales que oscilaban entre el grito y el silencio.

Lo que hizo excepcional a Gaitán con respecto a las demás grandes figuras políticas latino-americanas de su tiempo fue la convergencia en él de tres parejas de oposiciones, claramente destacadas por Daniel Pécaut (16), a saber: la del **antagonismo político** entre el pueblo y la oligarquía, que hace de Gaitán un **líder populista**; la de las **contradicciones de clase** que al oponer clases dominantes y clases subalternas erige a Gaitán en un **líder social**; y la del **enfrentamiento partidista**, inscrita en la contienda liberal-conservadora que hace de Gaitán un **líder político** (tradicional). El **gaitanismo** era, pues, el punto de intersección, o si se prefiere, el punto de equilibrio entre estos tres tipos de oposiciones. No sin razón se ha dicho que el poder de Gaitán residía justamente en la capacidad de amenazar con la ruptura de cada una de ellas y del conjunto. Gaitán se proyecta, entonces, como dueño del derrumbe del establecimiento y también de su conservación (17).

Así las cosas, y desde la óptica del triángulo Hacienda-Iglesia-Partidos, al cual habría que agregar seguramente a estas alturas la fábrica, tanto el cambio social, como el quiebre de viejas jerarquías y la irrupción de nuevos universos simbólico-culturales, eran interpretados no sólo como amenazantes sino incluso como precursores de una era de apocalipsis para Colombia. La incertidumbre parecía convertirse en fatalidad y ello ya resultaba inaceptable.

El desenlace de estas primeras décadas de construcción democrática es bien conocido: el 9 de abril de 1948 se produce un acontecimiento al mismo tiempo anunciado e imprevisto: es asesinado Gaitán, el personero de todos estos nuevos procesos. Impropiamente denominado el "Bogotazo", el levantamiento popular generalizado pero informe que siguió al asesinato mostró, al menos por un momento, que la eliminación del líder no ponía término a la efervescencia social sino que por el contrario la potenciaba. Pero a la postre reveló también verdades más profundas y más decepcionantes: la identificación personal de todos estos procesos con Gaitán es tal que, una vez aplastada la rebelión subsiguiente al asesinato, la política daba la impresión de regresar a sus cauces decimonónicos y deshacerse de todo lo social, tan arduamente construido en la primera mitad del siglo.

Nos hallábamos, pues, en plena Violencia y de repente se perdía incluso la noción del orden causal de las cosas, puesto que el asesinato de Gaitán que podía considerarse como momento inaugural de la Violencia era también el momento culminante de una primera oleada de Violencia que se había iniciado dos o tres años atrás.

IV. LA VIOLENCIA Y LA SUPRESION DE LO POLITICO

La Violencia del período "clásico" (1945-65), representada por los artistas de la época como un monstruo de mil cabezas, es muchas cosas a la vez: es guerra entre las clases dominantes y en cuanto tal versión tardía de las guerras civiles decimonónicas, pero es también guerra entre las clases dominantes y el movimiento popular, e incluso, hay ciertos períodos y regiones en los cuales parece estar dominada por expresiones residuales próximas al vandalismo y al banditismo, cuyos blancos y víctimas difícilmente se pueden adscribir a unos sectores sociales o partidistas con exclusión de otros. Vamos a proponer entonces una síntesis a la vez descriptiva e interpretativa que nos permita caracterizar el período. Lo haremos a partir del seguimiento de tres componentes que consideramos básicos, a saber: el terror, la resistencia y la resultante conmoción social. Los vamos a representar como tres cortes

16. Daniel Pécaut, *L'Ordre et la Violence*, Paris, EHESS, 1986.

17. Herbert Braun, *Mataron a Gaitán*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987.

sucesivos de la trama histórica (a semejanza de lo que hizo Braudel en su estudio del Mediterráneo) y los vamos a ordenar en una secuencia que va gradualmente de lo más visible a lo menos visible o invisible.

A. La Violencia como terror concentrado

Ningún estudio serio puede olvidar u omitir una reflexión sobre esta dimensión de la Violencia que por algo fue la que dejó el más duradero impacto en la memoria colectiva y en el subconsciente de los colombianos. Esta dimensión de la Violencia es la asociada primordialmente al sectarismo, a la dimensión político-partidista de la Violencia que parecería constituirse al margen de lo social pero que en realidad va más allá: ha invadido todo lo social y es la que, de hecho, impone su dinámica peculiar al conjunto. La Violencia es de alguna manera **terror concentrado**.

Ahora bien, para que se aclare el alcance de nuestro enunciado según el cual la Violencia-Terror es la supresión de lo político, es imperioso recordar previamente el carácter último de nuestros partidos históricos y de su enfrentamiento. Se trata, en efecto, de partidos que responden ante todo a la dinámica de las solidaridades comunitarias, es decir, que pertenecen propiamente hablando al orden de lo arcaico y prepolítico y que —como lo han señalado Malcolm Deas y David Bushnell— llegaron a las gentes y a las localidades antes que el Estado o el sentido de Nación (18). El mundo de los **copartidarios** es anterior al mundo de los **ciudadanos**. Al contrario también de la evolución europea en donde la instauración de lo político y la emergencia de los partidos son apreciadas como una cualificación de lo social, en Colombia nos hallamos pues frente a una **politización pre-social**. Más aún, desde el punto de vista de cualquier discurso alternativo, la contaminación político-partidista de estirpe liberal-conservadora, es inevitablemente asociada a la desagregación, desorganización, desarticula-

ción de lo social. Se la considera simplemente como un **obstáculo a la constitución de sujetos sociales** y de actores políticos autónomos. Aquí radica la ambivalencia originaria de lo político en Colombia. Muy lejos, por ejemplo, de la Francia republicana, estudiada por Maurice Agulhon, en donde las pasiones políticas no sólo tenían color, sino que inequívocamente rojo era obrero y blanco era patrón (19). Se entenderá entonces por qué podemos plantear que en Colombia, por el contrario —y de manera paradójica— cuanto más se acentúa el contenido partidista de las oposiciones tanto más se despoja a éstas de su potencial político. Llevando a su límite la paradoja habría que concluir que la politización partidista (liberal-conservadora) es una **politización despolitizadora**. Pues bien, el terror de los años cincuentas no hace sino exacerbar ese sentido de la politización-despolitización. Esa politización a la colombiana no crea actores sino **adeptos**.

Múltiples son los procesos que con posterioridad al asesinato de Gaitán se inscriben en la lógica de aniquilación de lo social y supresión de lo político. Tres de ellos, por lo menos, son indiscutibles: el primero, es el desmantelamiento, “a sangre y fuego”, de la rebelión de abril que se había convertido en una verdadera pesadilla, tanto más inquietante cuanto que se había traducido en probados actos de desborde de los cauces bipartidistas; el segundo, es el conjunto de dispositivos ideológicos legales y de coerción encaminados a desalentar o sofocar no sólo las organizaciones obreras más ajenas a la lógica patronal sino en general todo vestigio de protesta cívica o social; y el tercero es, por supuesto, la generalización de la represión en la remota provincia, que adquiere visos de cruzada de exterminio contra el gaitanismo y demás variantes de la izquierda política primero, antes de extenderse a todo el Partido Liberal luego.

Desde esta dimensión de la Violencia el espacio conflictual es definido no en términos de oposición, contradicción o antagonismo sino de persecución y de diáspora, de huida en múltiples direcciones: del campo a la ciudad, del

18. Malcolm Deas, “Algunos interrogantes sobre la relación guerras civiles y violencia”, en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (Eds.), *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, Cerec, 1986, pp. 41-46; David Bushnell, “Política y partidos en el siglo XIX”, en *Ibid.*, pp. 31-39.

19. Maurice Agulhon, *La République au Village*, Paris, Editions du Seuil, 1979, p. 134.

poblado a la metrópoli, de la zona central del país a las lejanas tierras de colonización, de Colombia a las naciones vecinas. Para subrayar la relación de continuidad entre todas estas formas de destierro interior y exterior se las cobijaba con un término común: el exilio (20).

En una sociedad en donde los contendores políticos y sociales no pueden ser pensados en términos de rivalidad sino de desviación de una verdad o creencia originaria —de ortodoxia y herejía, como en las guerras de religión— la regeneración social y política no puede lograrse a su turno, sino por medio de la proscripción o el aniquilamiento de quienes, según los parámetros histórico-culturales dominantes, se encuentran en el estado de trasgresión. A este tipo de representaciones de la sociedad se aproximaba la Colombia de los años cincuentas. Desde el poder se urdían verdaderas estrategias de homogeneización dentro de las cuales la guerra y la política no podían pensarse simplemente en términos de victoria sobre el enemigo sino de eliminación física del mismo. La diferencia se había hecho incompatible con el orden.

No se trataba, en efecto, del terror como una práctica ocasional, sino precisamente de algo más estructurado, de una verdadera política, que incluía aspectos tan diferenciables como los siguientes:

- Hay una **estrategia y una programación del terror** cuyo objetivo se encuentra sintetizado en una patética frase, repetida sin descanso por el líder político Laureano Gómez antes de acceder a la Presidencia: “hay un millón ochocientas mil cédulas falsas”. La frase equivalía a despojar de la ciudadanía al partido mayoritario del país.
- Hay unos **agentes del terror**, a menudo policías, patrullas del ejército o fuerzas combinadas que se dedican a asolar pueblos inermes.
- Hay unas **organizaciones del terror**, constituidas por bandas de fanáticos que ejecutan

la muerte por encargo: los tenebrosos “Pájaros”. Actúan éstos a sueldo de políticos, terratenientes y comerciantes, o por cuenta propia, pero en todo caso con la tolerancia o complicidad de las autoridades y la impotencia de las víctimas desprotegidas. En el relato ya clásico de Gustavo Alvarez Gardeazábal (21) todos los dirigentes políticos de una localidad, previa y públicamente notificados de su muerte próxima por los secuaces de “El Cóndor”, caen fatalmente acribillados uno a uno y en un orden también preestablecido, sin que haya poder que se movilice para evitarlo.

- Hay unos **rituales del terror**, una liturgia y una solemnización de la muerte, que implican un aprendizaje de las artes de hacer sufrir. No sólo se mata sino que el cómo se mata obedece también a una lógica siniestra, a un cálculo del dolor y del terror. El despojo, la mutilación y la profanación de los cuerpos son una prolongación de la empresa de conquista, pillaje y devastación del territorio enemigo. Los cuerpos mutilados, desollados o incinerados parecerían inscribirse en el orden mental de la tierra arrasada. Hay un despliegue ceremonial del suplicio, expresado a veces en actos de estudiada perversión como el cercenamiento de la lengua (la palabra del otro), la eventración de mujeres embarazadas (eliminación de la posibilidad de reproducción física del otro), la crucifixión, la castración y muchos otros, dirigidos no sólo a la eliminación de los 200.000 muertos o más del período, sino, adicionalmente, a dejar una marca indeleble en los millones de colombianos que quedaban. También importa entonces saber cómo se transmite el mensaje de intimidación y cómo se disponen los elementos del mensaje, cómo se construye el **escenario del terror**: si los muertos se dejan amontonados o esparcidos en toda una vereda, por ejemplo. A veces el mensaje es eficaz porque choca a primera vista; otras logra su eficacia precisamente en la medida en que resulte indescifrable. El escenario del terror debe ser, por otra parte, visible. Por eso hay ciertas prefe-

20. Carecemos todavía de un análisis del vocabulario de la violencia.

21. Gustavo Alvarez Gardeazábal, *Cóndores no entierran todos los días*, Guayaquil, Ecuador, Editorial Ariel Universal, 1974.

rencias espaciales: el cruce de caminos, el paso de los ríos, los montículos reconocidos en la región o el vecindario. El dolor en estas circunstancias no puede ser íntimo, tiene que ser aleccionador (22).

- Hay unos **instrumentos del terror**. No impactan de igual manera los muertos a bala que los que lo han sido a machete, ahorcados o a garrote. El arma de fuego puede resultar demasiado expedita si lo que se busca es la dosificación del dolor. Los agentes o estrategas de la muerte prefieren entonces el machete, el cuchillo o el garrote. Sumado, y no en sustitución de cualquiera de los anteriores mecanismos, el incendio, de reiterada ocurrencia, constituía la máxima expresión de teatralidad del terror.
- Hay, finalmente, una **cronología del terror**, dependiente en parte de los instrumentos utilizados y en parte de una calculada manipulación de la aceleración o retardo del tiempo de ejecución o, puesto en otros términos, de la relación entre unidad de tiempo y unidad de dolor. No tiene igual impacto el asesinato escalonado de 40 personas que una masacre del mismo número de víctimas en una sola operación fulminante y paralizante.

Se trata, en suma, de un primer escenario portador de una variadísima simbología cultural, es decir, de un conjunto de prácticas significativas que sugieren representaciones muy complejas no sólo de la política, sino también del cuerpo, de la muerte, del más allá. Recordemos que todo esto sucede en el país que por entonces se reclamaba como el más católico del mundo, así se tratara en buena medida de un catolicismo fanático, de escapularios, amuletos y tatuajes. La cruzada no era, por lo tanto, incompatible con la salvación eterna. En algunas regiones el discurso eclesástico legitimaba cuando no instigaba a ciertas bandas de asesinos, que por lo demás no encontraban disonante hacer pública profesión de fe católica o dejar signos de su religiosidad en los sitios de sus fechorías. No sobra agregar que los mismos

rastros de superstición podían encontrarse en la otra orilla del conflicto, en los grupos guerrilleros.

No hay que olvidar tampoco que en el trasfondo de este panorama hay banderas partidistas, que se trata de un enfrentamiento entre dos facciones políticas no muy nítidamente diferenciadas en su reclutamiento, que se necesitan mutuamente, que se saben solidarias del mismo orden social, pero que, sin embargo, arrastran “odios heredados” y sus diferencias reales se encuentran por tanto en un pasado casi mítico, difícil de precisar. En tales condiciones la Violencia tiende a revivir el **drama** de la tradición bíblica y **greco-romana** de los **hermanos enemigos** (Cain-Abel; Esaú-Jacob; Rómulo-Remo). De hecho, en una literatura muy amplia y en la retórica política la Violencia fue caracterizada durante buen tiempo como una **guerra fratricida**, y en consecuencia, posteriormente, el Frente Nacional (acuerdo bipartidista que pone formalmente término a una primera etapa de la Violencia) será enaltecido como una **reconciliación entre hermanos**, entre miembros de la gran familia colombiana, a la sombra de la Santa Madre Iglesia.

Mirada a través del prisma del terror, la Violencia nos ha dejado una literatura defensiva y derrotista, tanto que, en contraposición al mito de la Revolución Mexicana, se la ha definido como una gran vergüenza nacional que, por lo demás, no tuvo “ni caudillos, ni batallas, ni ideales, ni gloria” (23). Pero, dado su carácter desestructurador de lo social y lo político, tal vez sería mejor definirla —tomándole un término prestado a Michel Wieviorka— como un **antimovimiento social** (24).

B. LA VIOLENCIA COMO RESISTENCIA ARMADA

En verdad, el terror es sufrido pasivamente en muchas zonas, como un cataclismo, como una fatalidad. Pero el terror no monopoliza toda la

22. Los antropólogos Carlos Uribe y María Victoria Uribe han comenzado a incursionar con éxito en estas temáticas.

23. Herbert Braun, *Mataron a Gaitán*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987, p. 373.

24. Michel Wieviorka, *Sociétés et Terrorisme*, Paris, Fayard, 1988, pp. 17 y ss.

escena política. En muchas zonas también se organiza la resistencia.

La resistencia es la formación más o menos espontánea y a veces más o menos políticamente dirigida de núcleos armados de defensa que van desde el nivel veredal hasta la conformación de verdaderos ejércitos campesinos regionales (caso de la región de los Llanos en los límites con Venezuela). La lucha democrática, y en general la lucha política, que hasta entonces había tenido como canal regular la lucha electoral, se ve compelida a tomar el camino de las armas.

Vista así, la resistencia viene a llenar un vacío, el vacío dejado por el terror, que no sólo ha suprimido lo social sino también lo político como espacio de intermediación entre el nivel de expresión de lo social y el Estado. No se puede en consecuencia olvidar que en Colombia las guerrillas de los años cincuentas surgen inicialmente como una forma de organización forzada para confrontar el terror y no como parte de un proyecto político-insurreccional para la toma del poder, del Estado o del gobierno. "Las guerrillas las hizo la Violencia", dirían los campesinos del sur del Tolima, y cualquier liberal de la época podría hacerles coro. Por eso, a diferencia de las guerras que se declaran formal y solemnemente, que tienen ritos inaugurales, la Violencia no tiene un comienzo claramente identificable. Cuando se toma conciencia de ella, ya está instalada en todos los contornos de la sociedad.

Los focos de resistencia en su versión más articulada de guerrillas cumplían una gran variedad de funciones. Para decirlo muy brevemente, actuaban a veces como sustituto de movimientos sociales previamente destruidos (sindicatos agrarios, ligas campesinas, organizaciones indígenas); a menudo, como portavoces de ciertas identidades partidistas (liberales, comunistas) y otras simplemente como intérpretes de algunas comunidades y necesidades locales o regionales, más allá de cualquier identidad de clase o partido, por ejemplo, en torno a demandas de crédito, vías, control al despotismo de determinadas autoridades. Eran, en general, guerrillas establecidas sobre la base de homogeneidades políticas, organización partidista y controles territoriales.

En un ambiente de terror aplastante, como el que hemos analizado en las páginas precedentes, las gentes acosadas por la Violencia multi-forme necesitaban del mito de la época, el mito guerrillero. En efecto, las zonas de guerrilla eran imaginadas o representadas como zonas de dominio de la libertad, independientemente de los conflictos reales, a veces también del terror que pudiera campear en ellas. Una serie de símbolos cobran fuerza: el fusil, el machete, la bandera, el caballo son ensalzados por doquier en panfletos, coplas y en la poesía popular.

No es del caso hacer aquí una geografía social de estas guerrillas, que frecuentemente se entrecruzan con otras formas más confusas y subterráneas de acción armada. Pero no podemos dejar de mencionar los principales frentes guerrilleros que, con sus jefes-símbolos, se multiplicaron tanto en zonas de evidente continuidad de luchas agrarias, como en nuevas zonas de colonización, dinamizadas por la propia Violencia. Como zonas de tradición agraria e implantación guerrillera cabe destacar, en primer lugar, el área del Sumapaz bajo el liderazgo indisputable de Juan de la Cruz Varela, un migrante llegado a la región durante los agitados años veintes, admirador de Gaitán, captado en los tiempos difíciles de los años cincuentas por el Partido Comunista; en segundo lugar, el sur del Tolima, cuna de la guerrilla colombiana actual, en donde las guerrillas liberales de Mariachi y las comunistas de Isauro Yosa al tiempo que le huían a las fuerzas gubernamentales competían entre sí por las mismas bases campesinas. Como ejemplos del segundo tipo de zonas, de las de colonización y refugio, recordemos primero las guerrillas que conducía Rafael Rangel en las vertientes de los ríos Carare-Opón y Magdalena Medio, en el departamento de Santander, provincia de una inestabilidad política secular en donde las fronteras entre guerras civiles y Violencia son particularmente borrosas: escenario principal en la Guerra de los Mil Días (1899-1902); virtual guerra civil regional entre 1930-34, al iniciarse la transición de la Hegemonía Conservadora a la República Liberal; y, despunte temprano de la Violencia hacia 1944-45. Por último, *last but not least*, la región de los Llanos Orientales, que es en realidad la de mayor fusión entre la organización militar y la organización civil de la población, cuyo jefe Guadalupe Salcedo, el

más genuino símbolo de la guerrilla colombiana de entonces, amnistiado inicialmente bajo el gobierno militar de Rojas Pinilla, habría de caer asesinado luego en la transición al Frente Nacional. **Su asesinato será el fantasma de todo guerrillero amnistiado.**

No sobra subrayarlo, se trataba de guerrillas esencialmente rurales, tanto por su composición como por su teatro de operaciones, pero contaban con apoyos urbanos no desdeñables. Una informal, a veces muy elemental pero eficaz red logística era la que les permitía proveerse de municiones, armas, víveres, medicamentos, dinero y, sobre todo, de la información básica en torno a los planes y movimientos de sus enemigos.

Se las podía hallar indistintamente tanto allí donde la represión y la presencia traumática del Estado era muy notoria (Tolima, Sumapaz), como allí donde la presencia de este último no era visible ni como autoridad, ni como administrador o dispensador de servicios sociales básicos. No era sorprendente encontrarlas allí donde el Estado no podía llegar fácilmente como fuerza punitiva. Las de entonces eran guerrillas relativamente muy fijas, ancladas en sus zonas (o con gran movilidad pero sólo dentro de sus zonas) y no migratorias, nomádicas, como las de hoy que en el curso de la década del 80, por ejemplo, pasaron sucesivamente del Caquetá al Magdalena Medio, al Cauca, a Urabá.

Tampoco puede dejarse de lado en estas reflexiones sobre la resistencia que, no obstante la aparente polarización, hay una enorme diversidad en estas guerrillas y que por lo tanto a veces no hay relación alguna entre ellas; a veces entran en alianzas muy inestables; y, con singular frecuencia, entran también en relaciones francamente conflictivas. Las causas eran, por supuesto, muy heterogéneas: celos en las influencias regionales, es decir, reproducción de los rasgos propios del gamonalismo en las toldas guerrilleras, que hacía que toda disensión interna se tradujera en la conformación de un nuevo grupo; criterios encontrados en el manejo de las relaciones entre la guerrilla y los jefes políticos, entre los jefes guerrilleros y sus súbditos o entre los jefes guerrilleros y los bienes de la guerrilla; divergentes concep-

nes de las relaciones entre guerrilla y bases campesinas, sobre todo en zonas como el sur del Tolima y Sumapaz, de presencia simultánea de guerrillas liberales y comunistas. Estas últimas divergencias incluían asuntos del siguiente tenor: reforma agraria o propiedad individual en las zonas bajo control guerrillero; trato que debía dársele al adversario, es decir, respeto a su vida y bienes, o práctica de tierra arrasada; importancia que debía dársele a cierta ética revolucionaria, en temas como el enriquecimiento individual, las prebendas de los jefes; participación de niños y mujeres en tareas militares o sólo en las logísticas, que llevaba a la definición de actitudes frente a la unidad de la familia, etc. En suma, la pluralidad allí no era índice de democracia sino síntoma de anarquía.

Por otro lado, hay que subrayar que estas guerrillas están sujetas a los mismos problemas de constitución, conservación y reproducción de cualquier guerrilla. Dentro de esta perspectiva, la incorporación a la guerrilla tiene implicaciones como las que a título de simple ilustración enunciaremos:

- ruptura de lazos personales (familia, amigos) contrarrestada frecuentemente con la práctica de irse al monte familias enteras, con su padre convertido en jefe guerrillero, como sucedió en el sur del Tolima con los Loaiza, que dieron su nombre a una de las columnas guerrilleras más activas de la región;
- problemas en la adaptación, siempre penosa, a la doble vida del clandestino, que tiene que combinar actividades rutinarias con las de militante;
- diseño de estrategias de sobrevivencia y, ante todo la tarea de alimentar un ejército irregular, alternando operaciones de expropiación, proyectos de producción y formación de cadenas permanentes de suministro de víveres;
- ingreso a los circuitos de comercio de armas;
- políticas de reclutamiento de personal y de entrenamiento en la habilidad, en la fortaleza física y en todas las artes del tránsito de la

pasividad a una lucha continua con escasas o nulas posibilidades de victoria en el horizonte;

- definición de jerarquías internas, reparto de funciones y delimitación de zonas de control;
- acoplamiento a normas disciplinarias, objetivos colectivos y sentido de organización;
- en suma, todo el problema de inventarse una nueva vida que, dicho sea de paso, vuelve a plantearse otra vez con todo su dramatismo cuando llega el día de dejar las armas. He aquí un sinnúmero de elementos para una sociología de la guerrilla.

No creo trivializar los alcances de este proceso al postular que es innegable que para muchos niños y adolescentes colombianos entre 1949 y 1965 (para poner un límite que hoy ya resulta arbitrario), o sea para toda una generación, su espacio de socialización no fue la calle, el barrio, la familia o la escuela sino la guerrilla. Las FARC se precian de tener en su Estado Mayor al más antiguo dirigente guerrillero del mundo, Manuel Marulanda Vélez "Tirofijo", iniciado en las guerrillas liberales a comienzos de los años cincuentas. Para muchos colombianos, ser guerrillero se convirtió incluso en una opción de vida, como para otros dicha opción podría ser cura, abogado o zapatero. Casi podría decirse sin caer en la hipérbole que la guerrilla es no sólo una categoría política sino también un lugar en la estratificación social. Una rutinización de estas proporciones no deja de tener onerosas consecuencias sobre la Colombia de hoy.

Camilo Torres, idealizado como el cura guerrillero y no como el dirigente de masas que también fue, se interesó particularmente en construir una visión positiva de la Violencia como Resistencia, haciendo abstracción en cierto modo del otro aspecto ya analizado, el de la lógica del terror. Fue, naturalmente, la persistencia del movimiento guerrillero en las décadas siguientes la que le abrió camino a una revalorización-idealización de la resistencia en la literatura reciente. Esta prolongación del conflicto armado hizo pensar luego la Violencia

como etapa del movimiento guerrillero, como prehistoria de la lucha revolucionaria.

Pero, vuelvo a insistir, no hay que hacerse exageradas ilusiones sobre el nivel de articulación o estructuración de los dispositivos de la resistencia. Por un lado, porque en última instancia cada localidad libraba su propio combate, y por otro lado, porque aun en el caso de que pudiera hablarse de un proceso global de resistencia, ésta estaba inmersa constantemente en un entorno de violencia difusa o —para ponerlo en términos de Hobsbawm— en formas de violencia prepolítica, como el bandidaje y la simple criminalidad y delincuencia.

Con estas limitaciones, se avanzaba a mediados de 1953 en la formulación de un proyecto de coordinación guerrillera nacional, con vagas posibilidades de consolidación, pero con importantes efectos disuasivos en amplias capas de las élites dirigentes y en las propias filas del ejército. Por otro lado, cuando con el aplauso de todos los descontentos, tanto dentro del partido de gobierno como en la oposición, las Fuerzas Armadas comandadas por el general Rojas Pinilla asumen el gobierno, otros procesos estaban en curso. En la dinámica interna de algunos de los movimientos guerrilleros regionales aparecieron, efectivamente, claros signos de maduración de un proyecto democrático de sociedad, que postulaba un nuevo régimen de propiedad, reglamentaba la producción de acuerdo con los recursos disponibles y las necesidades de la población, establecía sistemas propios de organización de las finanzas, creaba nuevas instancias de poder y de justicia y redefinía las relaciones entre el pueblo y el ejército guerrillero. Este viraje que apuntaba a la construcción de un nuevo proyecto de Estado fue el que se materializó en las famosas Leyes de las Guerrillas de los Llanos, columna vertebral de la resistencia. Este texto que sorprende por su coherencia, iba quizás más allá de lo históricamente viable, sobre todo si se lo pone en cualquier otro contexto distinto al de los Llanos Orientales. Representa de algún modo la utopía de la resistencia.

Uno estaría incluso tentado a compararlo, y formalmente con ventaja, a dos textos pilares de la Revolución Mexicana, el "Plan de San Luis de Potosí" de Madero y el "Plan de

Ayala" de Zapata, probablemente conocidos por los inspiradores de las Leyes del Llano. Pero en tanto que los campesinos de Morelos iban más allá de la letra, el conjunto del movimiento armado colombiano y los hechos mismos estaban muy a la zaga de una normatividad revolucionaria. Además, quedaría esta diferencia sustancial: en la Revolución Mexicana, el terror estaba claramente demarcado de la lucha revolucionaria, estaba políticamente controlado; es más, el terror aparecía casi que exclusivamente como la forma de actuar del poder (de los porfiristas, de los huertistas, etc.) y no de la rebelión. La resistencia colombiana, en cambio, no escapaba (o sólo muy marginalmente) a la lógica del terror.

Este pasado probablemente explique, por lo menos en parte, la doble trayectoria de la resistencia de los años cincuentas:

—Una **línea evolutiva**, que desemboca en las guerrillas contemporáneas, cuyos cuadros fundadores están marcados casi todos por la herencia traumática de la Violencia. Como se sabe, las FARC, creadas formalmente en 1965, lo fueron a partir de núcleos de autodefensa, con raíces en los años cincuentas. Las demás (EPL, ELN, e incluso el M-19) surgieron por escisión de las FARC o del tronco común, el Partido Comunista (25).

—Una **línea involutiva**, que se ramifica en diversas variantes de bandolerismo político, las cuales, además de su arraigo en las comunidades campesinas, como el arquetipo de Hobsbawm, están atravesadas interiormente por el bipartidismo y en permanente proceso de tensión y arreglos con las estructuras locales de poder (26).

Por supuesto que uno podría interrogarse hoy si realmente esas fronteras inestables entre las guerrillas y el bandolerismo se clarificaron

definitivamente algún día. Uno podría preguntarse igualmente con razón si la **mercantilización de la política** vía el narcotráfico, que le ha dado nuevo impulso al clientelismo (y a veces visos empresariales) no ha tenido también como contrapartida, vía el secuestro, una **bandolerización contagiosa** de la llamada **oposición armada** en Colombia. Ninguna guerrilla en el mundo ha practicado el secuestro en dimensiones tan aberrantes como la colombiana. Y este componente de la lucha armada, que merecería un análisis muy serio, no puede escudarse en la también real lumpenización de sectores vinculados a los aparatos armados del Estado.

Pero volvamos por un instante a las guerrillas de los años cincuentas y precisemos, para cerrar este aparte, que desde la perspectiva de la resistencia y el conflicto armado posterior, el Frente Nacional, lejos de reconciliar, desafiaba. Desde todas las trincheras de la oposición se le denunciaba como un proyecto de unificación de las clases dominantes, como "el partido único de la oligarquía", según la expresión de Diego Montaña hace más de veinte años.

C. LA VIOLENCIA COMO CONMOCION SOCIAL SUBTERRANEA

Detrás del plano impactante del terror y del menos visible de la resistencia, hay un proceso de profundidad que afecta la propiedad, los espacios productivos y las relaciones sociales. La magnitud y las diversas direcciones en que ello se produjo fueron oscurecidas durante muchos años tanto por el reduccionismo partidista, como por ciertas interpretaciones bipolares del tipo feudalismo-capitalismo. Se aceptaba, es obvio, que como corolario de uno de los procesos anteriormente analizados o por su combinación se habían producido no sólo enormes pérdidas en vidas humanas, sino también pérdidas incalculables en bienes, cosechas y lucro cesante. Pero difícilmente se llegaba a visualizar, como ha sido posible comenzar a hacerlo hoy en perspectiva, el reordenamiento en las relaciones sociales y en algunas regiones el hundimiento de símbolos y poderes del viejo orden. Se tendía a ver la Violencia como una

25. Para mayores detalles véase de Eduardo Pizarro León-gómez, "Los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia", en *Análisis Político*, No. 7, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1989, pp. 7-31.

26. G. Sánchez y Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales y campesinos*, Bogotá, Ancora, 1983.

fuerza todopoderosa y no como un escenario de lucha en donde las víctimas de hoy podían recobrar la iniciativa política o social mañana. Para ponerlo en términos de la argumentación general de este ensayo, el intento de supresión de los adversarios sociales, que se había producido desde la lógica del terror, se revela ilusorio. Esos adversarios están comprometidos en una guerra invisible. Sólo que no se trata allí de un simple duelo entre siervos y señores. Es un escenario más complejo en el que hay desplazamientos de ejes industriales; crecimiento inusitado de algunas ciudades intermedias, como Armenia en el Quindío, y declinio o estancamiento de otras, como Libano en el Tolima, y Sevilla en el Valle; rutinización de irregulares mecanismos de movilidad de la propiedad raíz, por doquier; alteración de los canales de comercialización, principalmente de café y ganado; desordenadas y abruptas migraciones internas; procesos de diverso orden que afectan la organización interna de las haciendas, las correlaciones de fuerza entre terratenientes-autoridades locales y bandas armadas, cualquiera fuera su denominación, etcétera.

En términos de grupos sociales, sus efectos tampoco son unívocos. Así, la Violencia puede significar un canal inesperado de ascenso para tenderos y comerciantes inescrupulosos; en zonas de guerrilla puede traducirse en contribuciones forzosas para los ganaderos, convertidos en aliados naturales del ejército y del gobierno; en zonas en donde no prospera la resistencia es campo abierto para el despojo a millares de pequeños propietarios y a las comunidades indígenas, todavía más indefensas. De acuerdo con lo previsible, la Violencia favorece el ensanche de capitalistas agrarios que estaban bien ubicados antes de agudizarse el conflicto y se sirvieron de la misma Violencia para sostener y ampliar sus ventajas iniciales. Contra todo lo esperado, y habitualmente más difícil de aceptar, la Violencia contribuyó al derrumbe definitivo del poder hacendatario en zonas en donde la hacienda ya había sido debilitada en luchas anteriores y en donde la Violencia no había tomado por sorpresa a los campesinos (región del Tequendama y Sumapaz). Pero fueron tal vez los industriales los únicos que pudieron mostrar de manera consistente mayor conformidad y hasta entusiasmo

con lo que acontecía a sus inversiones y le lanzaban al rostro del país aterrado las estadísticas de su prosperidad. Como habrían de repetirlo con cinismo en la década de los ochentas: "a la economía le va bien, aunque al país le va mal".

En su pluralidad de trayectorias la Violencia rehúye, pues, a cualquier modelo preestablecido. Es, en verdad, un **proceso de procesos**. Sin embargo, no por ello se puede renunciar a ciertos principios de inteligibilidad. Los diferentes sectores son afectados de desigual manera: hay que subrayarlo, por más trivial que parezca. Enunciados del tipo: "la Violencia no impidió la expansión de la economía cafetera", tienen poco sentido si no están acompañados de un esfuerzo de desagregación. Desde la perspectiva de los efectos diferenciales que venimos subrayando, no es lo mismo un simple desplazamiento de inversiones de un terrateniente (que tiene recursos alternativos) que el despojo absoluto al campesino, precedido frecuentemente de su eliminación física y la de su familia.

Los efectos más álgidos en el plano social, cabe recordarlo, no fueron resueltos ni por la colonización, dirigida por el Estado o espontánea, ni por los planes de reconstrucción diseñados por el Frente Nacional (27).

Bajo esta óptica de los múltiples efectos sociales encontrados, tal vez resulta más clara la caracterización que hizo Hobsbawm hace más de veinte años cuando estimó que la Violencia era una especie de **revolución frustrada**. Porque a decir verdad, mirando retrospectivamente ese panorama descrito se siente como si en un mismo movimiento todo hubiera sido removido, sin que nada hubiera cambiado.

27. He explorado con mayor detalle estos temas en trabajos anteriores a los cuales me permito remitir al lector. Véase, G. Sánchez, "Violencia, guerrillas y estructuras agrarias", en *Nueva Historia de Colombia*, Bogotá, Editorial Planeta, 1989, Tomo 2, pp. 127-153.

—G. Sánchez, "Rehabilitación y violencia bajo el Frente Nacional", en *Análisis Político*, No. 4, mayo a agosto de 1988, pp. 21-42.

—G. Sánchez, "Tierra y violencia. El desarrollo desigual de las regiones", en *Análisis Político*, No. 6, Bogotá, 1989, pp. 8-34.

Ahora bien, recapitulando nuestras distintas aproximaciones a la Violencia desde el punto de vista de su desenlace inmediato, se comprende también mejor la triple dimensión del Frente Nacional: con respecto al Terror, proyecto de Reconciliación; con respecto a la Resistencia, proyecto de Unificación de las clases dominantes; y, con respecto a lo social, proyecto de Rehabilitación, reconstrucción y reforma, o más ambiciosamente todavía, plan de modernización capitalista de la economía y del Estado.

V. EL LEGADO DE LA VIOLENCIA

Si tratamos de recomponer el cuadro inicialmente dibujado, encontramos que al término de la Violencia los tres horizontes sociopolíticos en torno a los cuales se había desenvuelto la trama histórica nacional, a saber, la Hacienda, la Iglesia y los Partidos, se habían visto diferentemente afectados, a veces incluso con resultados ambivalentes.

La Hacienda, en primer lugar, que hasta entonces había tenido un papel protagónico en la conformación de la economía, el poder y la política, mostraba signos de cierto repliegue, como ya queda dicho. Muchos hacendados, sobre todo cafeteros, habían sufrido golpes irreparables en sus propiedades y en su prestigio social, aunque para ser exactos hay que agregar que posteriormente fueron compensados económicamente por el Estado, a través del Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), reorientaron sus inversiones y recorrieron muy probablemente desde otras posiciones parte del poder político perdido. Sobrevivieron, es cierto, algunas de las formas políticas ligadas al poder hacendatario, como el gamonalismo y el clientelismo. Y en un evidente reacomodo de los equilibrios regionales, saltaron a la palestra con una voracidad feudalizante los latifundios de otras regiones, como la Costa Atlántica, que se convirtió por lo demás en la cuna del formidable movimiento campesino de los años setentas. Pero hacia el futuro, el fenómeno sobresaliente con respecto a las nuevas modalidades de la Violencia fue que a lo largo del período del Frente Nacional el eje de la confrontación armada se desplazó: se fue instalando en las nuevas fronteras agra-

rias del país. De los espacios y roles fijos de la hacienda se pasaría entonces a los espacios móviles de la colonización. Las viejas Columnas de Marcha —núcleos iniciales de lo que el sociólogo William Ramírez llamó la “colonización armada”— que habían sido huida, fuga del centro a la periferia, escape al control del Estado, serían reemplazadas en los años ochentas por una nueva modalidad de Marchas Campesinas cuya trayectoria iría, por el contrario, de la periferia hacia el centro. Más aún, estas últimas solían presentarse como demanda de intervención de un Estado ausente o precariamente presente. No faltaría quien las viera como un proyecto de conquista, de toma de ese poder percibido como causante de la marginalidad social y política.

Por otro lado, a pesar de su dispersión geográfica, estas zonas parecen obedecer a ciertas fuerzas centripetas. En efecto, hoy por hoy es difícil explicar lo que acontece en una zona de colonización sin hacer referencia al conjunto de ellas. Parecería haber incluso una cierta circularidad intrazonal de procesos de muy corta temporalidad. Hay entre ellas migración de colonos, de fuerzas políticas y de conflictos. Como se señaló antes, en el curso de la última década, aparte de la zona indígena del Cauca, fueron sucesivamente ejes del conflicto nacional las siguientes zonas de colonización: el Magdalena Medio, el Caquetá, el Guaviare, Urabá. Podría decirse que hay un notorio carácter itinerante de la Violencia en el último decenio. Los nuevos escenarios de violencia se nutren de un desarraigo no sólo físico-espacial sino cultural y social. En todo caso, las zonas de colonización pasaron de ser zonas de refugio, como lo habían sido en los años cincuentas y sesentas, a ser focos de desestabilización y de enfrentamiento de guerrillas, narcos y paramilitares.

Hasta dónde pueda considerarse esta creciente fusión entre el movimiento colonizador y el movimiento armado como un repliegue táctico de larga duración, y hasta dónde como una simple marginalización irreversible de los proyectos políticos armados, es un interrogante respecto del cual toda respuesta puede resultar prematura. Pero en todo caso la opción o el destino colonizador significa un cambio inocultable en el paisaje político y cultural de la guerrilla.

¿Y qué decir ahora de la Iglesia? Los efectos sobre ésta tal vez sean más contundentes. Había facilitado la transición política, pero había perdido su fuerza punitiva tanto en la esfera del mundo privado como en la de las costumbres sociales. Sin mayores dificultades y después de un siglo de militancia conservadora, la jerarquía eclesiástica abrazó la causa del bipartidismo frentenacionalista, eliminando con ello uno de los más enconados factores de perturbación en la unidad de las clases dominantes. Consiguientemente a esta reorientación política, se tornó abiertamente refractaria a todo compromiso con lo social. El resultado visible no estaba en los cálculos de nadie: se abrió camino un proceso irreversible de secularización de la sociedad colombiana y de quiebre de muchas de sus tradiciones morales. O sea que, con efectos paradójicos similares a los de otras movilizaciones de tinte político-religioso, el fanatismo armado de la Violencia, con su furor apocalíptico atizado desde los púlpitos, produjo a la larga una erosión de las lealtades religiosas, o al menos una reformulación de sus relaciones con el poder. Recordemos cómo de igual manera el radicalismo tradicionalista de La Vendée en la época de la Francia revolucionaria hizo posible precisamente el culto a la Razón; y cómo el movimiento de los "Cristeros" del México posrevolucionario desencadenó como efecto de contragolpe una crisis en las relaciones del catolicismo popular con las jerarquías eclesiásticas (28).

En Colombia, apenas entrados los años sesentas, la Iglesia sufría el desafío doblemente simbólico de Camilo Torres, como cura y como guerrillero. Desde entonces, en mayor o menor medida, la descristianización comenzó a ser un hecho; desde entonces, también, la Iglesia dejó de ser exclusivamente un centro de autoridad para convertirse en un nuevo escenario de debate, controversia y lucha. Su hegemonía cultural era cuestionable y estaba efectivamente cuestionada (29).

Por último, los Partidos. En contraste con las transformaciones que por la vía traumática se habían producido en otras esferas de la sociedad, los partidos tradicionales, al igual que la Iglesia, se adaptaron y a través del Frente Nacional realizaron una mutación aparentemente inaudita: de la competencia a muerte (literalmente) pasaron al reparto programado y disciplinado del poder. Al hacerlo estaban simplemente ratificando una tradición. Para ponerlo en términos de Fernando Guillén Martínez, el Frente Nacional era un eslabón más del sistema estratégico de guerras y reconciliaciones sucesivas de los partidos tradicionales. Ningún debilitamiento pues hasta aquí en las solidaridades partidistas, a lo sumo modificación de sus formas. En efecto, un estudio reciente considera el Frente Nacional como el punto de quiebre en la configuración del clientelismo como forma dominante del ejercicio de la política en Colombia (30). Versión pobre del caudillismo decimonónico, el clientelismo convierte el poder en objeto de apropiación y transmisión privada e incluso familiar, como en las viejas dinastías. Como en ellas y como en todo régimen patrimonialista, los recursos y los asuntos colectivos se manejan con una elaborada mezcla de paternalismo y coerción.

Hay, sin embargo, otra cara de la misma moneda. Pese a estos reacomodos que parecerían no representar costo estratégico alguno para el bipartidismo, el desdibujamiento de las identidades partidistas con la prolongación del esquema y de la mentalidad frentenacionalista, tuvo un efecto retardado no menos apreciable: el ensanchamiento gradual de una franja de lo social y lo político "exteriores" al bipartidismo y frecuentemente criminalizados, si no en la ley, sí en la práctica política cotidiana. Por eso nos atreveríamos a decir que no obstante su carácter todavía mayoritario, particularmente en los ritos electorales, el bipartidismo es cada vez menos hegemónico en el sentido gramsciano, es decir, cada vez tiene menos capacidad de dirección y representación de toda la sociedad.

28. Jean Meyer, *La Cristiada*, 3 tomos, México, Siglo XXI Editores, 1973. Véase especialmente Tomo I, p. 362.

29. Luis Alberto Restrepo, "La guerra como sustitución de la política", en *Análisis Político*, No. 3, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1988, p. 82.

—Daniel Pécaut, *Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988*, Bogotá, Siglo XXI Editores, 1988, pp. 25 y 26.

30. Francisco Leal Buitrago, "El sistema político del clientelismo", en *Análisis Político*, No. 8, septiembre a diciembre, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1989, pp. 8-32.

En suma, después de la Violencia, los viejos pilares de la sociedad colombiana, la Hacienda, la Iglesia y los Partidos, se encuentran sumidos en una crisis inconclusa, sin resolución y sin claros sustitutos visualizables en el porvenir inmediato.

VI. GUERRA INSURRECCIONAL, MILITARIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y BANDOLERIZACIÓN DE LA GUERRA

Lo anterior nos lleva al punto final de estas reflexiones. En efecto, el Frente Nacional no sólo puso término a la Violencia sino que borró toda amenaza de guerra interpartidista en el futuro, originando así una nueva representación de la sociedad. En este aspecto significó indiscutiblemente un viraje histórico. Simultáneamente y a su pesar creó también las condiciones de posibilidad para que muchos sectores artesanos, obreros, universitarios y campesinos, a los cuales la Violencia había desconectado de las tradiciones populares contestatarias que se habían venido forjando en las primeras décadas del siglo, se afirmaran nuevamente ahora en una visión de lo político que ya no pasaba exclusivamente por el reparto del poder sino que apuntaba a la abolición del orden establecido y a la instauración de nuevas formas de sociedad.

Es en este contexto que debe verse el tercer momento de las relaciones entre la guerra y la política, el momento llamado de violencia o guerra insurreccional, que se construye sobre la base de una nueva división de la sociedad, dominantes y dominados, y que promete sacar a Colombia de su insularidad y excepcionalidad política, poniéndola al ritmo del mesianismo revolucionario que por entonces invade a toda América Latina. Eran tiempos inaugurales, de ruptura y de utopía, y en todo caso de una ascendente mentalidad revolucionaria para la cual parecía no haber pasado, sólo había futuro.

Como consecuencia de lo anterior, el conflicto político que se visualizaba dejaría de estar regido por la rutina de la incorporación de las disidencias y tampoco podría ser superable ya con simples "reconciliaciones estratégicas" como las que habían cerrado el ciclo de las guerras pasadas, incluida la Violencia. En ade-

lante, se trataría de impugnaciones frontales al poder que sólo cesarían con su inevitable sustitución. De la "desmilitarización del conflicto bipartidista" (31) que implicaba el Frente Nacional, se pasaría a una **militarización de la polarización social** en virtud de una rápida acción concientizadora de vanguardias armadas.

Muchos de los antiguos combatientes de la Violencia fueron invitados a realizar una purificación de su pasado (el revolucionario era la prefiguración del Hombre Nuevo que pregona-ba el Che Guevara) y a enrolarse en la que habría de ser la verdadera guerra, la guerra revolucionaria. Eran los tiempos de una América Latina idealizada frente a sí misma y frente al cansado pensamiento occidental, en la cual, además, tanto la guerra como la política se inscribían en los dominios de un nuevo mito, el **mito del recomienzo**. Todo parecía apuntar, desde esta óptica, hacia un reencuentro de lo político y lo militar, hacia una reconstrucción de la complementariedad entre la guerra y la política, como en el siglo XIX, pero en aras esta vez de un proyecto de sociedad enteramente inédito.

Sin embargo, factores de diverso orden han obrado en contravía de este sueño revolucionario. En primer lugar, el grueso de la sociedad colombiana se resistió a esta nueva polarización y los que la asumieron no pudieron salir de una condición de simples **rebeldes marginales**, por más inquietantes que resultaran algunas de sus acciones. Las repercusiones de esta situación no se hicieron esperar: en la medida en que perdía viabilidad histórica el proyecto armado, los rebeldes marginalizados fueron privilegiando hasta la hipertrofia los aspectos puramente militares y destructivos de sus tareas revolucionarias hasta que, para retomar la expresión de Eric Hobsbawm en otro contexto, se quedaron con un "programa negativo", separándose así aún más de la sociedad y de las identidades colectivas que pretendían representar. Prisioneros de una lógica con pocos o casi nulos espacios para la rectificación, en sus filas el esfuerzo intelectual es ignorado o degradado en aras de valores marginales y la crítica interna es asimilada a la trai-

31. La expresión es de Francisco Leal. Véase artículo ya citado.

ción. En síntesis, la guerra y todos los valores asociados a las armas se fueron imponiendo sobre las relaciones políticas hasta convertirse lisa y llanamente en su sustituto (32).

Un segundo factor que seguramente va a entrar a jugar papel determinante en la suerte futura del movimiento guerrillero y que va a contribuir a restarle viabilidad histórica en el porvenir inmediato o en el mejor de los casos lo va a obligar a reconstruirse enteramente sobre coordenadas nacionales es, claro está, la crisis actual de los modelos revolucionarios internacionales (la idea misma de modelo) y consiguientemente de los apoyos políticos, ideológicos y logísticos, para no hablar de las incidencias del replanteamiento ya lejano de algunos de sus pares en el propio continente, Tupamaros en Uruguay, Montoneros en Argentina y los que en Venezuela desembocaron en la corriente del Movimiento al Socialismo.

Pero el tercer factor y quizás el de mayor peso en la marginalidad crónica de los proyectos político-militares colombianos de las tres últimas décadas es de carácter histórico. En efecto, el pasado no es tiempo muerto sino que también a su manera impone límites al futuro y lo condiciona. Ahora bien, como es sabido las guerrillas colombianas actuales tienen a la larga su origen en la autodefensa campesina o en la resistencia de los años cincuentas y su primera infancia fue coetánea de la fase bandolera de la Violencia. Esto quiere decir que a pesar de su ideologización y de la internacionalización de su discurso a partir de los años sesentas, y a pesar también de los intentos que algunas de estas guerrillas hicieron por ganarse a su causa y transformar a algunos bandoleros, tales guerrillas no fueron a todas luces inmunes a los contactos, formas de acción y al ambiente todavía predominantemente bandolero en que nacieron. De allí su énfasis en la simple reproducción de la estructura y la capacidad militar, independientemente o a costa de su audiencia nacional; de allí también la primacía e incluso la autonomización de los métodos con respecto a los contenidos y objetivos políticos.

Para una sociedad que acababa de salir hastiada de la Violencia, la lucha armada, no obstante su apelación a una nueva legitimidad, carecería de todo atractivo a partir del momento en que comenzara a desdibujarse y a parecerse a aquella. Pues bien, el elemento más notorio de tal indiferenciación y el causante del creciente desencanto con la guerrilla o incluso del repudio social a ella ha sido indudablemente el uso generalizado y la rutinización del secuestro, sumada a las masacres y ejecuciones.

El secuestro como mecanismo de financiación, arma de presión política e instrumento de castigo al adversario no fue, hasta donde se sabe, utilizado por las guerrillas en los años cincuentas pero sí lo fue de manera sistemática y por primera vez en la época del bandolerismo (1958-65). Retomado inicialmente en forma selectiva por la guerrilla de nuevo tipo en los años sesentas, se extendió inusitadamente, sobre todo en los años ochentas, ensanchando así las fronteras móviles de la guerrilla no sólo de manera global con la Violencia sino en particular con la criminalidad común. La importancia atribuida a este mecanismo que podríamos llamar de acumulación primitiva de la guerrilla podía verse bajo signos diferentes e incluso contradictorios: o bien como necesidad de responder con nuevos recursos a las exigencias de crecimiento ostensible, o bien como síntoma de las dificultades de la guerrilla para sobrevivir con el limitado apoyo que le estaba brindando la población. En todo caso, el enriquecimiento se ha hecho patente y ha derivado hacia extremos tales que en la última década el peso relativo de los distintos grupos guerrilleros tanto en el escenario político nacional como dentro de la Coordinadora Nacional Guerrillera comenzó a medirse por su respectivo poderío económico y no por su proyección política o su arraigo social.

No cabe duda de que el uso y abuso de tales prácticas favorecía enormemente las tareas de la represión y le daba cabida a la vieja fórmula, aplicada también en la última fase del bandolerismo, de adjudicarle a los rebeldes en armas acciones que así no hubieran cometido, en las circunstancias descritas no resultaba inverosímil que hubieran podido cometer.

En síntesis, y con las precedentes consideraciones en mente, es lícito caracterizar esta últi-

32. La formulación de este proceso se encuentra en el artículo de Luis Alberto Restrepo que lleva justamente por título: "La guerra como sustitución de la política", ya citado.

ma fase del movimiento armado como una etapa de deslizamiento hacia la **militarización de la política y hacia la bandolerización de la guerra**. Como lo anotara Hernando Gómez Buendía, la guerrilla, sin advertirlo, estaba derrotando su propio proyecto político (33). Fue en cambio el cerco asfixiante del gobierno de Turbay a toda forma de protesta y movilización contestataria el que le devolvió un transitorio protagonismo a las guerrillas y le granjeó a éstas una amplia simpatía popular, que con audacia y golpes de opinión supo capitalizar el M-19 en torno a la divisa de Paz y Diálogo Nacional.

Fue también de manera un tanto inesperada aunque explicable que en 1982 el sucesor de Turbay, el presidente Belisario Betancur, convirtió dichas consignas en **proceso de Paz** y con fluctuantes resultados comprometió en ellas no sólo al conjunto del movimiento guerrillero sino a las más diversas fuerzas sociales. Después de un cuatrienio de escarmiento y virtual censura, la política recobraba con Betancur un cierto aire de foro y de quehacer colectivo.

Del controvertido Proceso de Paz de Betancur se pueden decir muchas cosas: que no estaba acompañado de las reformas estructurales de la sociedad y del Estado que la gravedad del momento demandaban; que no apuntaba a transformar el régimen sino a remozarlo; que se mostraba acucioso en la configuración de una imagen y de una opinión pública, pero indeciso en la consolidación de bases sociales propias y de un movimiento nacional que le diera autonomía frente a las anquilosadas maquinarias bipartidistas; que su predilección por las comisiones ocultaba una voluntad de rehuir el compromiso frente a los eventuales acuerdos que se protocolizaran; que al no ofrecer una clara delimitación de la materia objeto de negociaciones permitió que éstas se diluyeran en un gaseoso Diálogo Nacional, etc. Pero más allá de todo esto, y de la oposición del Congreso y de los gremios, y de la hostilidad abierta o soterrada de los militares, el hecho de mayor protuberancia era que la iniciativa de

paz de Betancur constituía un salto adelante incluso frente a las expectativas que hasta entonces podía hacerse el propio movimiento guerrillero (34). Coincidentalmente, como en 1953, el anuncio de la propuesta de paz de Betancur estuvo enmarcado por la celebración de importantes conferencias guerrilleras. Como se recordará, en el momento en que Rojas Pinilla asumía el poder (13 de junio de 1953) se estaba aprobando el documento político más importante de las guerrillas liberales, la Segunda Ley del Llano. En 1982, entre la elección de Betancur y su toma de posesión tuvieron lugar dos importantes conferencias guerrilleras: la VII Conferencia de las FARC (junio de 1982) en la cual éstas se transforman en "Ejército del Pueblo", FARC-EP, y la VIII Conferencia del M-19, celebrada en agosto de 1982 en el Putumayo. Las guerrillas estaban diseñando, pues, estrategias de expansión. Sin embargo, la amnistía incondicional las ponía en principio frente a una sorpresiva oportunidad histórica de silenciar las armas y ponerlas bajo el comando de la política. En medio de su perplejidad no pudieron reaccionar sino de dos maneras: con reservas y vacilaciones, sabedoras del sabor a traición de tantas otras amnistías en el pasado lejano y reciente del país, o incorporando el discurso de la paz a sus fines estratégicos de guerra revolucionaria.

Por otro lado, a la sombra o al margen del conflicto armado entre el Estado y el movimiento guerrillero se estaban incubando otros fenómenos cuyas repercusiones y alcances nadie estaba entonces en capacidad de anticipar: un crecimiento abrumador de la delincuencia común, cuyo peso sólo podía medir cotidianamente el hombre de la calle; una oleada de intolerancia social materializada, por ejemplo, en las "operaciones de limpieza" de mendigos y homosexuales; una franca **deserción del Estado** en terrenos álgidos, como el de la justicia, cada vez más sustituida por prácticas del orden del ajuste de cuentas; y, sobre todo, la proliferación de grupos paramilitares (Muerte a Secuestradores, MAS, y luego decenas y decenas de otros) que se convirtieron a la vez

33. Hernando Gómez Buendía, "La violencia contemporánea en Colombia: un punto de vista liberal", en G. Sánchez y R. Peñaranda (Eds.), *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, Cerec, 1986, p. 390.

34. Para un completo balance del gobierno de Betancur véase de Socorro Ramirez y Luis Alberto Restrepo, *Actores en conflicto por la paz*, Bogotá, Siglo XXI Editores-Cinep, 1989.

en causa y efecto de la reticencia de la guerrilla a la desmovilización o a la entrega de armas, y en evidente riesgo para los amnistiados (35).

Miradas retrospectivamente las cosas, podría decirse en consecuencia que cuando se inauguró el período de Betancur, ni el conjunto del movimiento guerrillero, ni el conjunto de las clases dominantes habían madurado para una paz negociada... y sin embargo ya era tarde. Colombia había entrado en lo que el sociólogo mexicano Sergio Zermeno ha llamado una "dinámica de desorden" que, en nuestro caso, convirtió la confrontación social y política en una cadena de retaliaciones sin fin que sólo pueden capitalizar los más fuertes. Así, a los frentes guerrilleros se respondió con "auto-defensas"; a la movilización popular de los paros cívicos y las marchas campesinas, asimilada a la subversión, se respondió con la "guerra sucia"; al secuestro, con las desapariciones; al asalto, con la masacre. Se produjo, en suma, una verdadera clandestinización no sólo de la extrema derecha sino en términos más generales de la guerra, o de las múltiples guerras, para ser más precisos. Frente a ellas la unidad del Estado parece simplemente deshacerse ya que éste es en algunos aspectos víctima; en otros es testigo tolerante o complaciente, y en otros es parte de los poderes "clandestinizados".

Tales son los tortuosos y complejos caminos a través de los cuales llegamos a la situación actual, a la última fase de la guerra. En efecto, la arriba mencionada clandestinización de los aparatos armados al servicio de la empresa política de la extrema derecha encontró un terreno común con el narcotráfico que de simple negocio derivó a este agresivo proyecto político-militar que se abre paso a base de bombas y de sicarios. Por este camino también el conflicto político interno se internacionalizó de diversas maneras. Trágica irrupción en la escena mundial de este secularmente introvertido país.

El narcotráfico y las fuerzas a él asociadas o tras él escudadas impusieron su dinámica al

conjunto conflictual de la sociedad colombiana de hoy y la han conducido a una feudalización o "cartelización" de la guerra, si así pudiera decirse, y a una verdadera pulverización de lo político, detrás de las cuales es cada vez más difícil reconstruir un principio de unidad. Podemos decir en consecuencia, tal vez con un poco de exageración, que en la última década Colombia dejó de resolver a tiempo una guerra y hoy ya no sabe cuántas tiene.

En un lúgubre panorama sobre América Latina, el sociólogo brasileño Francisco Weffort concluye que vivimos hoy un "bloqueo de perspectivas" (36). En ese sentido la situación colombiana no difiere de la de sus vecinos del subcontinente. Pero más allá de esto, Colombia parece haber regresado a su vieja excepcionalidad: cuando casi todos los países del área temen por su viabilidad económica, Colombia se interroga sobre su viabilidad política. Nunca habíamos estado tan literalmente en tiempos de Constituyente. Tenemos que reinventar el País.

35. Para un análisis de estas nuevas manifestaciones véase de Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán, *Ciudad y violencia*, Foro Nacional por Colombia, Bogotá, 1990.

36. Francisco C. Weffort, "A América Errada: Notas sobre a Democracia e a Modernidade na América Latina em Crise", *Cadernos Cedec*, No. 14, Sao Paulo, 1990, p. 12.